



**Inteligencia alimentaria global:
una oportunidad para la paz y las
familias rurales**

Aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, proponen el que hacer desde la unidad global para eliminar la pobreza, resguardar el medio ambiente y garantizar que todas las personas vivan en paz y prosperidad. Dichas metas demandan el encargo no solo de los Gobiernos, sino también el compromiso de la academia, empresa y sociedad civil.

En este sentido, el gran desafío de la humanidad es una gran oportunidad para Colombia; en particular, por ser un elemento transversal para el cumplimiento de los ODS como la dimensión del desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutricional. Allí es donde se abona al cumplimiento de las metas planteadas en todos los 17 ODS.

Por lo anterior, es necesario desarrollar puntos de encuentro en torno a iniciativas de alcance global, tanto productivas como de incidencia en política pública. Asimismo, consolidar recursos y capacidades con enfoque territorial e impacto internacional a partir de objetivos con-

cretos. Dentro de la gran apuesta por la paz, la cual debe ser sostenible, se requiere el diseño de modelos que superen la responsabilidad social y construyan sinergias de cooperación intersectoriales entre el Estado y la sociedad (nacionales e internacionales), en pro de estrategias de inclusión productiva y social; así como agregación de valor, generación de una adecuada rentabilidad a los campesinos y trabajo decente. Además de una sociedad desde lo territorial formada, estructurada, comprometida y con ingresos que garanticen una vida digna.

Por consiguiente, el aporte de la investigación a los ODS y a la construcción de la paz se materializa con una propuesta académica y empresarial. Asimismo, la implementación de Cultura C bajo su línea de “Reingeniería social para la promoción de la equidad y la prosperidad en comunidades menos favorecidas” que propenda insertar en cadenas globales de valor la oferta agraria de familias productoras rurales vulnerables y/o víctimas del conflicto, a través de la promoción

de un emprendimiento asociativo solidario rural dinámico (comercializadora internacional), con el propósito de la autogeneración de trabajo decente en las comunidades campesinas colombianas e impactar en la seguridad alimentaria global.

La agenda 2030 aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General para el Desarrollo Sostenible propone el quehacer desde la unidad global. Sus objetivos son eliminar la pobreza, resguardar el medio ambiente y garantizar que todas las personas vivan en paz y prosperidad.

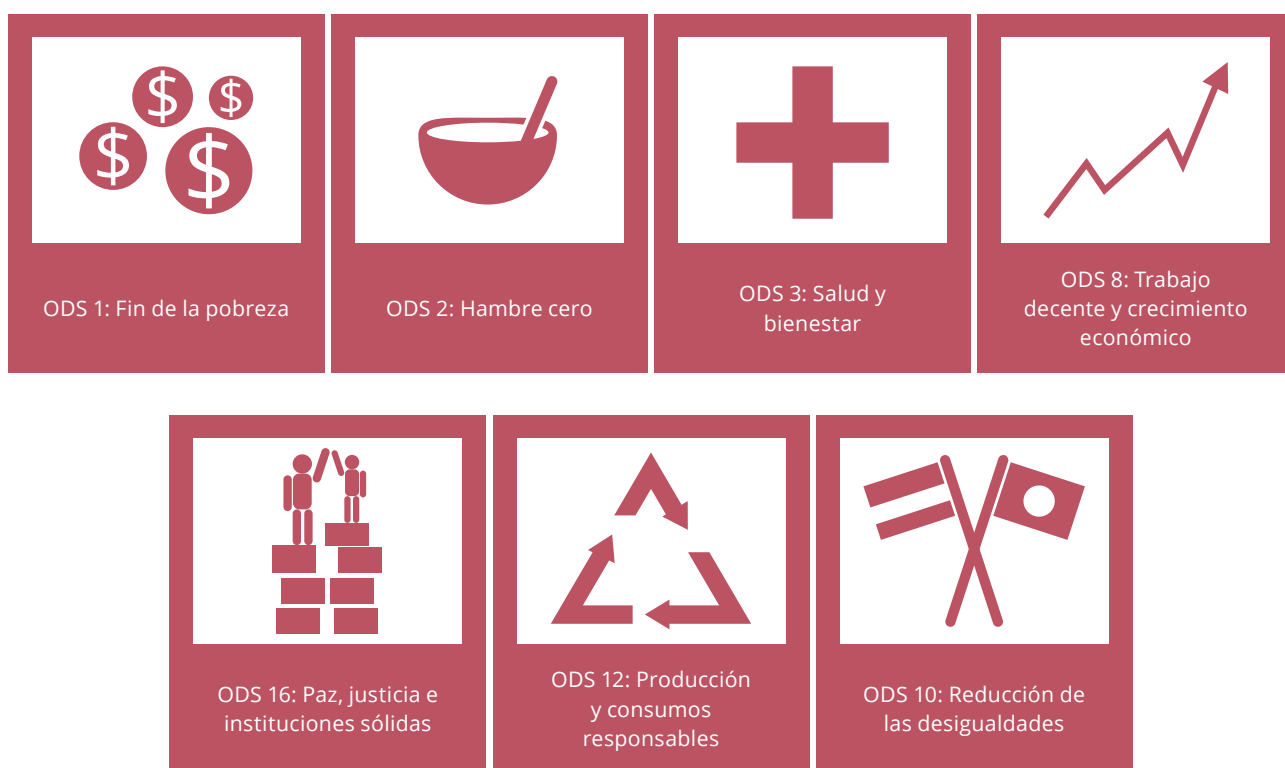
De acuerdo con el anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Latinoamérica y el Caribe se destacan por ser la fuente agrícola más grande del mundo. Lo anterior, debido a su porcentaje de aguas dulces, tierras y productos agrícolas. A esto se suma su recurso humano, es decir, los campesinos que a través de la experiencia y la innovación proveen de nuevas formas de producción.

Según los expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés: *Food Agriculture Organization of the United Nations*), para el año 2050 la producción alimentaria deberá aumentar en un 60%. El propósito es alimentar los nueve mil millones de personas del mundo todo es cuestión de oferta y disponibilidad de alimentos (Zeigler y Truitt, 2014).

1.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y la agricultura

En Colombia, un elemento común para el cumplimiento de los ODS es la dimensión de desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, abona al cumplimiento de las metas planteadas en todos los 17 ODS (FAO, 2018), especialmente para un grupo de siete (7) de ellos, a saber:

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible



Bajo esta mirada, se debe tener en cuenta que el 78% de las metas convenidas para garantizar el cumplimiento de los ODS establecen iniciativas que deben ejecutarse en zonas rurales. Ahora bien, es importante comprender la dimensión de desarrollo rural y seguridad alimentaria y nutricional, en términos de territorio, sostenibilidad social, económica y ambiental de las familias, comunidades y sociedad civil rural, como escenarios estratégicos por atender en Latinoamérica. Un estudio realizado en el año 2018, evidenció que entre 2014 y 2016 la pobreza rural tuvo una regresión

significativa en la región latinoamericana. Aumentó a 59 millones de pobres (de 46,7% a 48,6%) y a 27 millones de pobres extremos (de 20% a 22,5%) (FAO, 2014).

De igual manera, el índice de pobreza multidimensional para América Latina de acuerdo con la Universidad Oxford, especialmente, en el área rural supera la urbana en todos los países sujetos de estudio (17) de la región de Latinoamérica y el Caribe. Esta medición se realizó mediante un indicador de pobreza multidimensional compuesto por cinco (5) medidas: vivienda, servicios básicos, calidad de vida, educación, empleo y protección social. Por consiguiente, esta situación sigue acentuando las brechas de pobreza y desigualdad entre la población rural y la urbana, impactando negativamente los avances en las metas de los ODS (Herrera Araújo, 2018, p. 47).

Respecto a Colombia, el país se acerca a cinco (5) décadas de trabajar por transformar el sector rural, con diferentes reformas agrarias; además de la aplicación de modelos para la optimización del campo que resulten en la equidad y prosperidad para los pobladores rurales, lamentablemente con un éxito parcial.

En consecuencia, los indicadores de pobreza resaltados por la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) evidencian que los que realmente construyen riqueza en Colombia, a partir del usufructo de la tierra, son los grandes productores, industriales y multinacionales. Ellos disponen de agroindustrias como en el arroz, el banano y otros productos que forman parte del sector agroalimentario. No obstante, los pobladores rurales que componen las unidades productivas de la agricultura familiar carecen de protección social integral, infraestructura y tecnología suficiente para ser competitivos en todos los sentidos y, de esta manera, gestores y autores de su propio desarrollo.



Por consiguiente, los niveles de pobreza en las zonas rurales del país son desalentadores; aproximadamente la mitad de las familias campesinas viven en la pobreza (DNP, 2015). El indicador de pobreza multidimensional que estima el acceso a bienes de interés social, y otras dimensiones de calidad de vida en el campo, es de 53.7 %. Dicha cifra está entre las cabeceras municipales y el sector rural, indicador aplicado en el último Censo Nacional Agropecuario, ejecutado en el año 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Además, el censo 2015 mostró que el 70.4% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) tienen menos de cinco (5) hectáreas, es decir, el 2% del te-

ritorio rural (DANE, 2015). De acuerdo con la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), esto último también lo señala el índice de Gini de la tierra rural (mide el grado de concentración de la tierra rural). Para el caso colombiano, en una escala de cero (0) a uno (1) alcanza el 0.87 (UPRA, 2016).

Por otro lado, Antonio Paz Cardona (2018) deja en evidencia que el 1% por ciento de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. El 19% de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su mayoría, pertenecen a la agricultura familiar, definida por la FAO (2014) como:

La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia y la granja están vinculados, coevolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales.

Entonces, en la Agricultura Familiar (AF), entendida como las UPA, predomina principalmente la mano de obra familiar. La administración se le adjudica a él/la jefa/e de hogar quien ocupa un rol significativo en el cumplimiento de los ODS, teniendo en cuenta que representa el 87% de los productores agropecuarios del país y su producción agrícola total oscila entre el 45% y el 68% (DNP, 2015).

En este sentido, a pesar de la importancia identificada de la AF, cada vez ocupa menos área rural y es menos competitiva. Se debe entender que la distribución inequitativa de bienes productivos, en especial la tierra, es un fenómeno que aumenta las secuelas de la pobreza y limita las oportunidades para el mejoramiento de vida en la población rural nacional.

Además, la agricultura familiar debe enfrentar diversas barreras de acceso a otros activos productivos diferentes a la tierra, como la financiación, tecnología y formación pertinente. Esto concluye en un atraso estructural en el campo, demostrado en el mínimo acceso a Mercados Rentables, Estables y Crecientes (MREC) (Rodríguez, Ramírez y Restrepo, 2018); así como en limitada agregación de valor a los productos, deficiente formación técnica y profesional, alto grado de informalidad y baja remuneración laboral (DNP, 2015).

Por lo anterior, es necesario adoptar nuevas estrategias diferenciales, de respuesta rápida y prácticas; además de procesos con enfoque territorial que garanticen la equidad social y económica de la población rural mediante la cooperación. Así mismo, debe manifestarse en formas de asociación solidaria que construyan sinergias para capitalizar las pequeñas capacidades de la agricultura familiar, facilite los procesos de inclusión social y productiva y, a su vez, propenda por formar en el sector rural determinantes competitivos de gestión, financiación, acceso a tierras, industrialización, agregación de valor, diversificación de productos y trazabilidad, desde la siembra hasta el consumo final. Lo anterior, de acuerdo con los parámetros, estándares y requerimientos de los mercados más exigentes y cadenas globales de valor.

Un análisis más detallado evidencia que durante los últimos años Colombia presentó un descenso sostenido en los indicadores de crecimiento económico en el sector agroalimentario. Si bien entre los años 2000 y 2014 la economía colombiana creció a una tasa promedio año del 4%; en su mayoría, correspondió al incremento del consumo interno, acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de apertura comercial, el stock de capital, la población activa y los niveles de escolaridad. En el periodo de 2000 a 2010, la Productividad Total de los Factores (PTF) solo creció a una tasa promedio anual de 0,26%. De hecho, desde 1990 el crecimiento anual de la PTF ha sido nulo o negativo en el 50% del periodo.

1.2 Pobreza rural y acuerdos de paz

Con base en lo anterior, encontramos que en los últimos años el crecimiento económico del país ha estado asociado más hacia la acumulación de capital físico y fuerza laboral que a aumentos en la productividad. Es una situación tendiente a respaldar las dificultades por las que pasa el sector agrario inmerso en el conflicto armado; la posesión de tierras sigue siendo la principal causa del conflicto dentro del país. Esto permite reiterar que un porcentaje alto de las tierras cultivadas por los campesinos no les pertenece. En este sentido, desestimulando la labranza pues el producido se destina para los propietarios.

Resaltando la importancia del campesino se conoce que la concentración de la propiedad rural de la tierra (52%) le pertenece solo al 1,5% de la población campesina (Botia-Carreño, 2018). Ahora bien, las agendas de paz para el territorio colombiano en el 2015, postuladas por el expresidente Juan Manuel Santos, concibieron el desarrollo del sector como primordial. Dentro de los diferentes discursos, manifestó que “la paz comienza por el campo”; así, la seguridad alimentaria y nutricional, el cambio climático y la seguridad para la paz van de la mano con los planes de desarrollo para el Gobierno Nacional.

Dentro de los acuerdos de paz, como parte de la mesa en los temas principales se contó con el desarrollo integral del campo. Según el DANE, desde 2016 se aumentó en un 29% las tierras sembradas y en el 2017 la economía del sector rural creció un 4,9%. También es preciso resaltar que el Gobierno Nacional identificó el problema de la desigualdad en la tenencia de tierras. En el punto uno (1) del Acuerdo Final de Paz planteó un fondo de tres (3) millones de hectáreas para la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (RRI); en teoría, incrementa la producción agropecuaria y disminuye la desigualdad en el campo. En

suma, volver a Colombia una despensa del mundo no es un asunto que compete solo al Gobierno o a los campesinos, también a todos los colombianos.

Para lograr este objetivo, el Ministerio de Agricultura y ProColombia (entidad encargada de promover las inversiones, las exportaciones no tradicionales, el turismo y la marca país) han construido una estrategia cuyo eje es promover inversiones, objeto de análisis, reglamentación y políticas gubernamentales en varias ramas del sector. Algunos ejemplos se evidencian en la RRI (contenida en el acuerdo de paz), el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025, el Programa de Transformación Productiva (PTP), el Decreto de la estructura del sector de inclusión social y reconciliación, la Política Nacional de Consolidación y la Reconstrucción Territorial.

De acuerdo con esta tendencia, los objetivos del Gobierno Nacional manifestados a través del DNP y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) generaron, entre otros, el documento 3866 del ocho (8) de agosto de 2016, para ser aplicado entre el 2016 y 2026. En su resumen ejecutivo declara el análisis y la conclusión de las tres (3) principales causas del bajo crecimiento económico en Colombia y las tres (3) estrategias para abordar; con el fin de revertir la caída del crecimiento económico nacional, explícitas en la tabla 1.

Tabla 1. Causas del bajo crecimiento económico vs estrategias para abordarlas

CAUSAS	ESTRATEGIAS
<p>Fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y, por lo tanto, inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía.</p>	<p>Mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como de absorber y transferir conocimiento y tecnología.</p>
<p>Disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo, y en particular, en el número de productos relativamente sofisticados, producidos y exportados por Colombia.</p>	<p>Cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política y de un aumento en la pertinencia de la oferta de programas de formación para el trabajo. Asimismo, aumentar la eficiencia y efectividad en el acceso a financiamiento, principalmente para la innovación y el emprendimiento.</p>
<p>Existencia de fallas de articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre diferentes entidades del orden nacional.</p>	<p>Promover el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamientos productivos internacionales.</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de CONPES, 2016.

Desafortunadamente, el empleo también se ha concentrado en ramas de actividad económica diferentes a aquellas con mayores oportunidades de productividad laboral. Lo anterior, a causa de la falta de tecnificación de los procesos productivos, la capacitación específica y especializada en las áreas de oportunidad del sector y la región; también por la ausencia de la asociación solidaria, la agremiación, la clusterización de los pequeños productores y, finalmente, la ausencia de programas y apoyo gubernamental.

La baja exposición a los mercados internacionales está limitando el crecimiento de la productividad del aparato productivo colombiano y, en consecuencia, la exportación de bienes más sofisticados que involucran mayor uso de conocimiento, tecnología y procesos de innovación.

Frente a este escenario, se hace neurálgico promover proyectos que propendan por la transformación de la estructura productiva del país; asimismo, que mejoren las tasas de crecimiento e impulse un desarrollo económico equitativo y sostenido. Por consiguiente, incorporar recursos en las actividades científico-tecnológicas, la biotecnología, la transformación de los bienes primarios que hoy se están exportando y el desarrollo de nuevos materiales. En general, la producción y comercialización de bienes y servicios que den valor agregado con pertinencia y respondan a las exigencias del mercado.

1.3 Seguridad alimentaria global: realidades y oportunidades

Es importante conocer que el total del área agrícola con cultivos agroindustriales en Colombia equivale a un 79% de palma de aceite, café y caña panelera. En términos de producción representan el 82%, cifras que demuestran el mínimo crecimiento y la limitada diversificación en el portafolio agrario; conjuntamente al deterioro agudo del balance comercial del sector agroalimentario. Allí confluye el frustrante lento crecimiento de las exportaciones y el incremento acelerado de las importaciones. Estas últimas crecieron entre 1991 y 2014, anualmente a una tasa promedio del 13%, marcadas por la importación de cereales. A su vez, en el mismo periodo las exportaciones de alimentos registraron un crecimiento de 4,4% (DNP, 2015).

Colombia produce 32 millones de toneladas de alimentos, pero debe importar alrededor de 12 millones de toneladas para cubrir la demanda interna. Dicha cifra podría ser reducida si se aumenta la producción agrícola nacional. En la actualidad, el problema principal en el sector agrario es que todas las hectáreas en el país no se explotan en su totalidad: solamente 7,6 millones (Medina, 2017).

No obstante, aunque la mayoría de los suelos colombianos son fértiles y aptos para la agricultura, se presentan grandes dificultades que impiden el incremento en la producción de alimentos. Por ejemplo, en la desigualdad en la tenencia de la tierra, la producción ganadera en Colombia ocupa más tierra de la que debería. Para tal fin se destinan más de 14 millones de hectáreas, mientras que solo son aptas 2,7 millones. Asimismo, es un problema el alto costo de fertilizantes y plaguicidas y los fenómenos naturales que dañan las cosechas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2017).

El panorama actual para el sector agrícola colombiano está enmarcado en logros y dificultades en diferentes aspectos desde lo social, político, económico, hasta lo cultural. Por consiguiente, sus actores, los campesinos vienen pasando por dificultades evidenciadas en la baja productividad con la que cuentan en la pobre tecnificación, en el precio del comercio internacional y los costos de producción.

Ahora bien, la comunidad agrícola colombiana viene pasando por ciertas dificultades, dentro de ellas la baja capacitación y tecnificación del agro. En este sentido, las estrategias de desarrollo de este sector se generan de manera tradicional, enfocadas hacia los mismos grupos poblacionales. Por lo tanto, forman en los campesinos más pobres baja posibilidad de participación dentro de las oportunidades de desarrollo, centrando los recursos en aquellos con ventajas de acceso y tecnología.

Los municipios de la Sabana Centro y Bogotá se proyectan como un consolidado del sector agricultor para atender la demanda alimentaria casi inmediata de la capital. Es evidente que el sector horticultor ha disminuido su participación en la siembra y cosecha; incluso, la disminución en el aprovechamiento de las tierras efectivamente cultivables en cada uno de los 11 municipios de la región. De tal manera, se realiza la caracterización del sector con base en la información suministrada por las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), desde las secretarías de desarrollo económico en cada municipio, a la Secretaría Departamental de Agricultura y Desarrollo Rural.

Bajo esta dinámica se requiere la descentralización de los recursos y las mismas capacitaciones. A su vez, que propendan por la capacitación de todos los sectores del agro e impacten en su potencial productivo a los campesinos, agricultores y trabajadores rurales con alta capacidad. En otras palabras, con más oportunidad para los más pobre y con más representantes.

Ahora bien, siguiendo con las cifras, Colombia bota a la basura 9,76 millones de toneladas de comida al año. Una situación preocupante sobre todo con la situación social actual del país, cifra que corresponde al 34% de alimentos destinados al consumo humano. Además, siendo parte de la cadena alimentaria desde la producción agropecuaria hasta la etapa de consumo en los hogares (DNP, 2016).

El proceso de desperdicio en el país fue sustentado por Simón Gaviria (director del DNP) en el 2016, de acuerdo con los resultados del análisis realizado de los 9,76 millones de toneladas que se pierden y desperdician en el país. La distribución se visualiza en la tabla 2.



Tabla 2. Porcentaje de desperdicio alimenticio vs etapa de la cadena productiva

PORCENTAJE DE DESPERDICIO	ETAPA DE LA CADENA ALIMENTARIA
40,5% (3,95 millones de toneladas)	Producción agropecuaria
19,8% (1,93 millones de toneladas)	Poscosecha y almacenamiento
3,5% (342 mil toneladas)	Procesamiento industrial
20,6% (2,01 millones de toneladas)	Distribución y retail
15,6% (1,53 millones de toneladas)	Hogares

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP, 2016.

Según Gaviria, esta producción podría alimentar durante un (1) año a ocho (8) millones de personas, equivalente al 90% de la población de Bogotá. Sin embargo, dentro del análisis se estableció que la región que más pierde producción agrícola en el país es la región central: Cundinamarca. Dicha situación refleja el desbalance con el que cuenta el sector; dejando en evidencia la necesidad de la tecnificación y la recuperación y uso debido de estos alimentos.

1.3.1 Realidades y oportunidades.

La situación como tal, es decir, el de pertenecer al selecto grupo latinoamericano de países productores agrícolas, trae consigo grandes retos importantes. Lo anterior, en el sentido de producción con altos estándares de calidad y en respuesta a los desperdicios y desecho alimenticios. Por otra parte, en el año 2016 se realiza la firma de los llamados “Acuerdos de paz” y como protagonista se encuentra la reforma agraria cuyo objetivo principal consiste en:

Erradicar la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. (Urna de Cristal, 2016)

En el 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola colombiano alcanzó cifras en un 7,8% correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de ese año, gracias a las buenas condiciones climáticas. Sin embargo, el sector sigue contando con dificultades debido a la crisis económica, rentabilidad del sector,

altos costos de producción y precios con pagos irrisorios a los pequeños productores. A esto se suma el estado de las vías, el estado del transporte y, en sí, la misma estructura vial (PIB, 2017).

La Asociación Nacional de Estudios Económicos establece que para que el sector agrícola realmente cuente con una producción eficiente, debe consolidar una política de inversiones estratégicas de largo plazo. Además, mejorar los derechos sobre la tierra, reforzar el sistema de innovación en el sector y fortalecer el marco institucional agrícola.

Es relevante destacar que en los últimos años el consumo de productos hortofrutícolas ha crecido activamente a nivel mundial. Ha sido impulsado de manera importante por el cambio y tendencia a hábitos de consumo saludables de las personas y familias que piensan en el cuidado y bienestar. A su vez, esta condición ha generado que el mercado crezca a un ritmo superior al de la producción, motivando un cambio sustancial en las políticas públicas y en los modelos de negocios agroalimentarios y agroindustriales.

Chile, Perú y España; por ejemplo, se han enfocado en potencializar el cultivo

de frutas y hortalizas, así como al desarrollo de programas de agro industrialización que optimicen la productividad y competitividad para abastecer la creciente y exigente demanda de alimentos global. En el 2011 se dio a conocer un documento que promulga a Colombia como la próxima despensa de alimentos de Latinoamérica y el Caribe. Este manifiesta que el país podría ser el próximo en la generación de producción agrícola para el consumo de Latinoamérica siendo uno (1) de los siete (7) países que pueden aportar a este resultado. En este sentido, el FIDA evidencia:

[...] cómo la producción agrícola se requiere su duplicidad para el 2050 debido al crecimiento del ingreso disponible de las economías emergentes, la mejora en la calidad de la dieta y el incremento en la población mundial, que alcanzará los 9.000 millones de personas. (FINAGRO, 2017)

Colombia tiene potencial para el desarrollo agrícola y ser despensa mundial de alimentos, como lo aseguró Marcos Rodríguez (director de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la FAO) durante la novena edición de Agroshow Pajonales en 2017. Esto se debe a que el 35% del territorio continental hace parte de la frontera agrícola nacional; es decir, 400.759,6 kilómetros cuadrados aptos para la agricultura (UPRA, 2016), a las condiciones de suelos y naturaleza de los mismos.

En el informe manifiesto por la FAO (2015) sobre el análisis de 223 países, dirigido hacia la expansión del campo y su función rural; Colombia fue catalogada en el lugar 25. De igual manera, el informe argumenta que, de 22 millones de hectáreas cultivables en el país, solo están sembradas 4,8 de ellas. Bajo esta mirada, la labor a desarrollarse es ardua por cuanto se requiere una alta productividad que, por ende, permitirá la competitividad en el sector.

1.4 Actores partícipes

Hasta ahora es evidente la transformación de la agricultura en una agroindustria competitiva, innovadora e incluyente, que integre sistemas de calidad e inocuidad. Asimismo, que cumplan las exigencias internacionales y desarrolle marcas sociales y de origen, con el objeto de lograr la modernización técnica y tecnológica de todo el aparato productivo nacional, el cambio hacia la innovación, la movilidad social, académica y la proyección e incursión en cadenas globales de valor.

Tras la observación de las desigualdades, la agenda para el desarrollo territorial y del agro se establece a través del acuerdo de paz en la reforma agraria. Contempla el acceso a tierras para los campesinos, la protección de áreas de reserva natural; el aporte a las vías con su tecnificación y, en muchas áreas del sector colombiano, la construcción de electrificación. Son planes que estimulan el fomento o fortalecimiento de las economías familiares y solidarias; así como facilidad con programas que le permitan al campesino la comercialización de sus productos a un precio justo.

En Colombia, las últimas cifras se encuentran preocupantes para el sector agrario y su oferta laboral. El 85% de los trabajadores de cinco (5) millones existentes en el país, son informales sin contrato estable y sin protección integral que den garantías a la labor realizada. La razón consiste en que las políticas gubernamentales no los acogen, según las cifras entregadas en Agro-expo 2019 por la ministra de trabajo Alicia Arango.

En este sentido, es necesario establecer políticas que cobijen la labor del campesino y el trabajador rural, que fomente la inversión en el campo y, sobre todo, que no permee la desaparición de este. Por consiguiente, se requiere colocar una gran atención en los altos costos de producción, insumos, tecnificación y la baja rentabilidad de sus tierras.

En muchas ocasiones, la intencionalidad de estos campesinos es ubicarse laboralmente (o sus hijos); asimismo, otorgar educación a sus parientes son parte del primer objetivo del desplazamiento. Es bueno mencionar que en los últimos años las cifras de desalojo de tierras, y por ende del campesino, han sido de alta preocupación ya que promueve un abandono a las prácticas tradicionales sobre la tierra.

De igual manera, es elemental que los estamentos públicos y privados participen en el apoyo para la generación de políticas y el cumplimiento de las mismas; además de acercar la ciencia y tecnología a este sector. Conviene subrayar que es imperante ofrecer garantías de seguridad social para los trabajadores del campo (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017).

A menos que el sector público, las organizaciones sociales y el sector privado, realicen una unión permanente; no será viable afrontar el reto social para la construcción, seguimiento y desarrollo de la paz. Sinónimo de esta es el desarrollo rural, protección social integral, políticas justas para la apropiación de tierras por parte de los campesinos de manera legal; la comercialización de sus productos con

mercados rentables estables, crecientes y con apoyo financiero para tal fin.

No es un secreto que estas tres (3) partes de la sociedad cuentan con todo el potencial de desarrollo: la academia desde el conocimiento científico; el Estado con la generación y cumplimiento de políticas que proporcionen al campesino mejoras en su situación, y la empresa con la inversión que ofrecen para la producción y para toda la cadena de suministros; hasta la misma comercialización de sus productos. Asimismo, aportar al desarrollo rural integrado el cual hace referencia a la agricultura como factor clave para el crecimiento del país, mediante la aportación de mano de obra, capital, alimentos y divisas.

Se hace énfasis en la importancia del pequeño agricultor y busca principalmente transformación de las estructuras del desarrollo rural. Así, es preciso establecer cuáles son las estrategias a desarrollar desde dos (2) miradas: los componentes que aportan al desarrollo rural desde la educación y la seguridad alimentaria de familias productoras dentro de los territorios, a partir del aporte empresarial. Por su parte, el Estado aporta desde políticas que promuevan el proceso y apoyen a las comunidades.

1.4.1 Aporte de la academia.

Aspectos como la planificación territorial, productividad, sostenibilidad, sustentabilidad, comercialización, tecnificación, ciencia y tecnología, son conceptos que realizan una interacción de la educación, el sector empresarial y rural. Las Instituciones de Educación Superior (IES) son llamadas a aportar a través de la transferencia de conocimientos en los campos disciplinares donde están inmersas las necesidades del sector agropecuario. Son temas que siempre han estado presentes en las agendas y acuerdos que ha ejecutado el Gobierno Nacional para el aporte del desarrollo de este sector.

Es un hecho que los países que cuentan con el aporte de ciencia y tecnología potencian sus estándares de productividad y desempeño en producción agrícola; con innovaciones en sus formas de cultivos, de procesos. Así, el rendimiento se refleja y la calidad se evidencia en la capacidad de adaptación.

Es de conocimiento público las limitantes existentes en el sector agropecuario; entre ellas, tecnologías y formas de relación con el que cuentan los productores, que afectan la competitividad y las cadenas de productividad. Allí es donde la academia debe acercarse bajo estudios que aporten un análisis comprensivo, que evalúen la perspectiva agroempresarial asociativa bajo enfoques más integrales. De esta manera, generando insumos para el mejoramiento de la política (Rodríguez Espinosa, Ramírez Gómez y Restrepo Betancur, 2018).



Sin embargo, no es el único aporte de la academia. Sin lugar a duda, cuenta con una infraestructura de actuación para la transferencia de conocimiento. Es decir, el reconocimiento de las formas en que las comunidades han llevado sus procesos; asimismo, actualizar los existentes a través de la investigación y entregarle a la comunidad herramientas que generen esta cohesión y cooperación entre las partes.

De igual manera, la academia es uno de los actores encargados de guiar para el desarrollo de las capacidades (o competencias) dentro de las comunidades. Otorga pedagogías acordes con sus necesidades, en sí, dirige sus comportamientos hacia la cooperación, no como réplica de modelos que se extienden en el territorio nacional y, en definitiva, no producen el efecto que se espera. En cambio, como lineamiento participativo donde el campesino sea autor de su propio progreso y protagonista de sus éxitos.

1.4.2 Aporte de la empresa.

En este sentido, se visualiza cómo con ayuda de la empresa la vocación productiva del sector agrario puede potenciarse. En ciertos espacios se ha hablado de llevar la tecnificación al campo como solución, sin embargo, no es la única. Se requiere de un acercamiento con las organizaciones privadas y el fomento de factores como la asociatividad dentro de los actores que hacen parte del sector productivo en toda la cadena de abastecimiento, sean privados, públicos o actores de la sociedad civil.

Las estrategias existentes para el fortalecimiento de este sector están enmarcadas en experiencias de diferentes grupos. Fueron realizadas en el país durante los últimos 50 años y, en cierta medida, se dieron en paralelo al conflicto armado, buscando potenciar el sector y a sus comunidades tras las dificultades políticas y económicas del país. En adición, las potencialidades con las que contaba bajo las restricciones presentes en el sector se vieron obstruidas por el individualismo presente y la poca transparencia de diferentes entidades a la hora de ejecutar sus recursos.

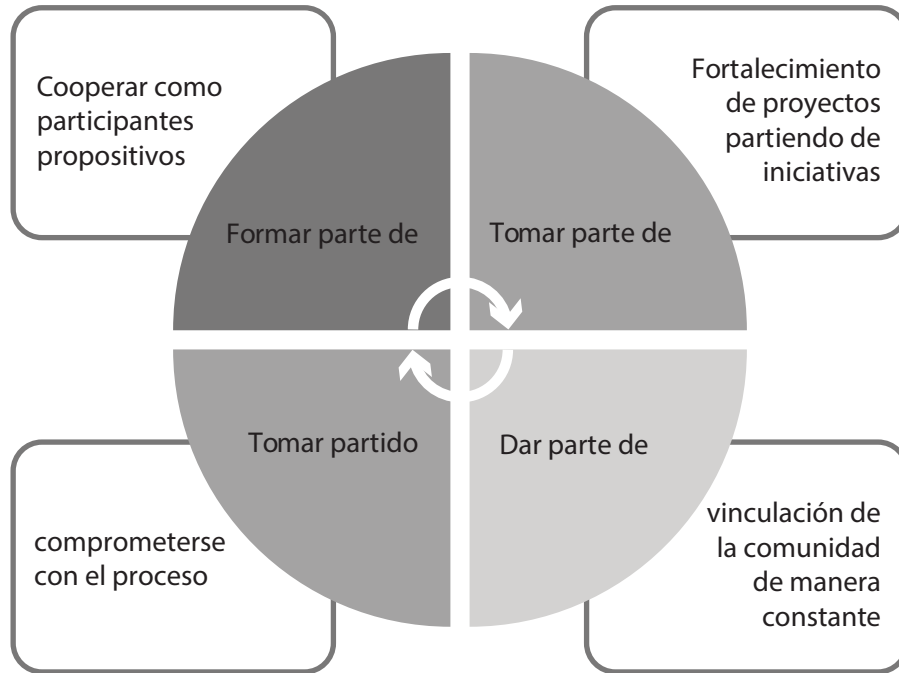
En la actualidad, el impulso para esta comunidad está delimitado por dos (2) aspectos. El primero es el factor socio-organizativo con base en el capital social. El segundo, corresponde a el sector empresarial con sus asuntos económicos, productivos y soportados en la planificación de plan operativo, estratégico y de agro negocios.

Es así como se evidencia la necesidad de realizar un proceso de relacionamiento entre las diferentes organizaciones que eviten la integración del sector y se establece participación de todos los actores aumentando la eficacia en los procesos y una efectividad en las ventas, promoviendo la competitividad.

Guillermo Solarte Lindo (2017), manifiesta las particularidades que conviene tener en cuenta en las organizaciones para la conformación de asociaciones de productores. Esta debe verse como una empresa que, como todas, exige esfuerzos; en consecuencia “no sólo depende de la voluntad de los asociados sino también de la organización y las herramientas de gestión que tal asociación incorpora como base de su desarrollo” declaró en entrevista realizada por Antonio Morales de Misión Rural.

De igual manera, manifiesta la especificidad de ser socio, su significado y características de acuerdo con LEADER +3 (ENRD, 2016) de la Unión Europea. Consiste en un método de desarrollo local utilizado para hacer partícipes a los actores en la comunidad en el diseño y la puesta en marcha de estrategias; la toma de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo de sus zonas rurales (Solarte, 2011), como se evidencia en la figura 1.

Figura 1. Estrategias Leader



Fuente: Elaboración propia.

Los anteriores aspectos se visualizarán en la parte de empoderamiento para la reingeniería, en secciones posteriores. En este sentido, se establecen los aspectos a desarrollar en los campesinos y trabajadores rurales; además, cómo entre las organizaciones asociadas se debe contar con alineación al interior. Sin embargo, los objetivos, misión y cohesión deben ser evidenciables para generar confianza y estabilidad, como se ha aplicado en el contexto a partir de la experiencia de Cultura C, estrategia relatada en el presente libro.

1.5 Procesos de emprendimientos asociativos solidarios dinámicos

Después de recorrer cada uno de los aspectos anteriores se da cierre a través de los Emprendimientos Asociativos Solidarios Dinámicos (EASD) y su aplicación en el contexto. En resumen, son la respuesta y el resultado después de reunir las necesidades del sector con las estrategias a utilizar.

Los EASD son iniciativas empresariales de base asociativa solidaria. Generan trabajo decente, elevado grado de formalización, así como altas tasas de diferenciación y crecimiento sostenido. En este punto, según los aspectos relatados se establece que la necesidad del sector se sustenta y es visible ante los proyectos, políticas y la necesidad de consumo.

Por otro lado, uno de los mecanismos con los que se cuenta para el desarrollo de las comunidades sostenibles es la asociatividad. El papel de la academia es fundamental para marcar la ruta, acompañarla y documentar la experiencia. No obstante, después de realizar todo el proceso del apalancamiento con el sector ¿cuál sería el paso a seguir y asimismo cuál es el mecanismo?

Como respuesta a este interrogante se nombra que, además de la asociatividad, para ocasionar el cambio dentro del contexto agro se debe contar con procesos de emprendimiento rural (productivos o comerciales). El fin es la actuación efectiva del proceso pues se ha demostrado que es una alternativa oportuna para la generación de ingresos ante la dificultad de establecer un empleo.

1.5.1 Emprendimientos asociativos.

Son experiencias grupales en las que el trabajo y la cooperación ocupan el lugar central; en donde las decisiones se toman de manera relativamente participativa y democrática; en las que se producen bienes o servicios destinados a su venta para generar ingresos en dinero, cuyo fin y sentido último es la reproducción de la vida de sus integrantes y de sus familias; es decir, que están orientados hacia la satisfacción de sus necesidades y no hacia la acumulación de capital (Vázquez, 2019).

La definición es elaborada a partir del beneficio que representa la unión de esfuerzos desde las condiciones similares de las comunidades, para poner en marcha proyectos y aunar esfuerzos que les permitan a la comunidad sacar el mejor potencial y ganancias para todos los participantes. De esta manera, los potenciales recursos, medios, tecnología y procesos de comercialización se dan para la mejora de la comunidad. No obstante, presenta una serie de dificultades desde diferentes factores (tabla 3).

Tabla 3. Dificultades percibidas

Administrativo	Falta de recursos, insumos con altos costos, dificultades de comercialización, problemas legales y contables.
Financiero	Insuficientes inversores. Bajo capital. Políticas de préstamos; no existe alcance de los asociados.
Social	Conflictos internos. Sobrecarga en funciones. Precariedad laboral.

Fuente: Elaboración propia.

Estas dificultades traen consigo un trabajo exigente en acompañamiento por parte de los entes gubernamentales o educativos. Deben disminuir el impacto de su presencia para la proyección correcta de los emprendimientos. Ahora bien, el emprendimiento asociativo es parte de la economía solidaria y un:

Sistema socioeconómico, cultural y ambiental, conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanísticas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. (Ley 454, del 4 de agosto de 1998)

Como se ha mencionado, no es suficiente con la asociatividad para generar procesos sostenibles en el tiempo. Adicionalmente, se requiere de un trabajo interinstitucional que permita la financiación, tecnificación y comercialización de los productos resultantes. Allí es donde ingresa el término "dinámico". De igual manera, para que todo funcione se requiere la cooperación entre los participantes; así como este potencial: la competitividad. La definición más acertada, que influye a lo largo del documento, es elaborada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el BID:

Aquél nuevo o reciente proyecto empresarial que tiene un potencial realizable de crecimiento gracias a una ventaja competitiva - tecnológica o no - como para al menos convertirse en una mediana empresa, es decir, que opera bajo una lógica de acumulación generando ingresos muy por encima de los niveles de subsistencia del propietario que son reinvertidos en el desarrollo del emprendimiento y que crece muy por encima de la media de su sector. (p. 5)

En este sentido y como proceso de práctica se establece el realizar con los campesinos de comunidades vulnerables basados en las capacidades regionales, un proceso de asociatividad que les permita contar con un proceso de autoempleo y así mismo potencie sus productos, demostrando el sistema de unión interinstitucional.